



El coronavirus desnuda la **CATÁSTROFE** **SOCIAL** del capitalismo



Gobierno PSOE-UP:

**¡Recursos para la sanidad pública ya!
¡Fuera los recortes y las contrarreformas!**

La economía capitalista, en estado de pánico



Víctor Taibo
Izquierda Revolucionaria
Comisión Ejecutiva

La economía capitalista ha entrado en estado de pánico. En las últimas semanas las bolsas de todo el mundo se han hundido perdiendo casi un 20% de su valor, y el barril de Brent ha caído en un solo día más de un 20%, una situación no vista desde la guerra del Golfo en 1991. Los datos económicos se revisan a la baja cada semana, y la patronal bancaria ha dicho que el crecimiento mundial se quedará en el 1%, lo que implica una situación de recesión global.

Sectores como el de las aerolíneas se enfrenta a pérdidas de hasta 102.000 millones de euros, habiendo quebrado ya una gran compañía. La epidemia de coronavirus está poniendo en evidencia la debilidad de la economía y las enormes contradicciones y desequilibrios acumulados durante años, que ahora amenazan con estallar virulentamente. Sin embargo, este virus es solo el accidente que ha hecho enfermar gravemente a una economía senil.

La enorme crisis de legitimidad del capitalismo, a consecuencia de un crecimiento acelerado de la desigualdad y la miseria en todo el mundo, ha llevado a que uno de sus portavoces tradicionales, el *Financial Times*, plantee la necesidad de resetear el capitalismo, cuestionado “por centrarse en maximizar las ganancias y el valor para los accionistas”. Son los mismos que en medio de la gran recesión de 2007-2008 abogaban por refundarlo, frenar sus abusos y humanizarlo. El problema, sin embargo, como ya señalaron Marx y Engels, son las propias leyes bajo las que opera el mercado, que hacen inviable un capitalismo de rostro humano.

Una recesión de consecuencias imprevisibles

La agenda capitalista desplegada para conjurar la crisis de 2008 ha sido incapaz de responder al desafío y ha empeorado las contradicciones estructurales

que afloraron una década atrás. 2019 cerró con un crecimiento del comercio del 1% frente al 4% de 2018, el ritmo más bajo de la última década. Ahora, tras el estallido de la epidemia, el interrogante es hasta dónde puede llegar esta crisis.

China, que ha aportado un tercio del crecimiento mundial durante los últimos diez años, se enfrenta a su menor aumento en casi 30 años, un 4%, según el Instituto de Finanzas Internacionales, tras contabilizar ya parte del efecto del coronavirus. El gigante asiático se ha convertido en un actor central. Su fulgurante expansión económica, que ha supuesto también la acumulación de enormes desequilibrios y contradicciones, dio mucha estabilidad al capitalismo, pero ahora todo esto parece convertirse en su contrario.

El crecimiento para EEUU, ya moderado en 2019, ha sido revisado a la baja: un pírrico 1,3% para 2020, por el momento. Su sector industrial, a pesar de las promesas de Trump, continúa en declive. En 2019, 16.000 trabajadores del cinturón del acero en EEUU perdieron su empleo. El presidente estadounidense se ha tenido que levantar el pie del acelerador en la guerra arancelaria con China, ya que, entre otros factores, el 77% de las exportaciones chinas corresponde a productos semielaborados para producir mercancías en industrias norteamericanas. El hecho de que en el reciente Foro de Davos se haya señalado, por primera vez, la política norteamericana como uno de los principales factores de inestabilidad mundial es un buen reflejo de las debilidades de su economía y del tipo de recuperación a la que hemos asistimos.

La Unión Europea (UE), que enfrentaba una situación de estancamiento, entrará abiertamente en recesión, destacando Alemania, con una caída constante de su producción industrial. La locomotora europea se enfrenta a un retroceso agudo de sus exportaciones, que aportaban en 2018 el 47,4% de su PIB. La producción de coches ha registrado la cifra más baja desde 1997, con las exportaciones cayendo un 13% en una industria que exporta el 77% de su producción. Unos datos

que ponen en jaque a la economía alemana, especialmente por la abrupta interrupción del comercio mundial. Por otro lado, Italia enfrenta una situación de completa parálisis económica, con un enorme endeudamiento que podría estallar en cualquier momento. La posición de Europa en el mundo sigue en retroceso.

Endeudamiento récord y especulación financiera

Esta crítica situación se combina con un crecimiento exponencial de la deuda y de una especulación financiera completamente desbocada. La deuda global alcanza cada año nuevos récords, muy por encima de las cifras previas al estallido de la gran recesión. La deuda pública, empresarial y de las familias en el mundo llegó hasta los 253,6 billones de dólares, el 322% del PIB mundial, con un nuevo ascenso en 2019 de casi 8 billones de dólares. El 60% del incremento de la deuda mundial corresponde a China y EEUU, y el 70% del aumento de la deuda empresarial corresponde a multinacionales norteamericanas. Por otro lado, los países “emergentes” incrementaron su deuda hasta los 72,5 billones, un 223% de su PIB, la ola “más grande, rápida y generalizada” desde 1970, según el Banco Mundial.

Esta situación completamente anómala estalló en septiembre pasado en el conocido como mercado de recompra (repo) en EEUU, donde bancos y operadores de bolsa acuden diariamente para obtener préstamos. Ante la escasez de dinero en efectivo, se produjo una subida de los tipos de interés del 2,21% al 10%, y la Reserva Federal (Fed) se vio obligada a proporcionar en una semana 203.000 millones de dólares, la mayor inyección de liquidez desde 2008. Desde entonces ha tenido que introducir otros 60.000 millones mensuales y reducir los tipos, que ante los efectos del coronavirus han vuelto a recortarse, quedando al borde del 1% y reduciendo enormemente el margen de maniobra futuro. Christine Lagarde, presidenta del BCE, ha re-

conocido que se están quedando sin munición tras haberse instalado los tipos negativos en la eurozona, especialmente en Alemania. Una situación sin precedentes que sostiene artificialmente una parte importante de la economía capitalista, impulsando una espiral especulativa descontrolada que amenaza con estallar en cualquier momento.

La capitalización de las bolsas internacionales también ha alcanzado cifras récord, 86 billones de dólares, el 100% del PIB mundial. Este crecimiento histórico de los beneficios en los mercados bursátiles no se corresponde con un avance de la economía real, dando paso, ante el pánico, a pérdidas multimillonarias. Nos encontramos ante una expansión del capital ficticio mientras la inversión productiva continúa estancada o colapsada, destacando el papel de la recompra de acciones en dichas subidas: solo Apple ha gastado 239.000 millones de dólares en los últimos diez años. Nos encontramos ante el sueño del capital: obtener dinero del dinero sin pasar por el proceso de producción. Algo que inevitablemente termina chocando con la economía real.

La dictadura del capital financiero y de los monopolios

Desde la gran recesión la concentración de la riqueza y la propiedad ha dado un salto sin precedentes, confirmándose las tendencias monopolísticas innatas al desarrollo capitalista. Recientemente se ha producido la fusión bancaria más importante desde 2008 entre BB&T (BBT) y SunTrust (STI), que dará lugar a la sexta entidad financiera más grande de los EEUU. Estos seis grandes bancos y entidades financieras acapararán más del 65% de todos los activos financieros y depósitos del país. También se ha producido la fusión entre Charles Schwab y TD Ameritrade, la primera y tercera mayores empresas de corretaje bancario y bursátil (brokers) estadounidenses. Gestoras de fondos de inversión como BlackRock, actualmente la mayor del mundo, gestiona capitales por valor de 6,3 billo-

nes de dólares, el equivalente al PIB combinado de Alemania y Francia.

Cuando se produjo la crisis de las *subprime*, sesudos analistas y economistas burgueses señalaron como uno de los principales problemas la existencia de bancos y entidades financieras de inmensas dimensiones. Diez años después, la concentración del capital financiero es aún mayor. Este proceso de concentración y monopolización, que echa por tierra el mito capitalista de la “libre competencia”, se ha extendido a todos los sectores de la actividad económica. La revista *Nature*¹ en un reciente estudio sobre el cambio climático confirmaba hasta qué punto los recursos naturales del planeta, y la producción agropecuaria, mineral, farmacéutica o de cualquier otro sector, se han concentrado en manos de un puñado ínfimo de grandes monopolios.

Numerosos economistas burgueses, y especialmente los dirigentes reformistas, muestran su frustración frente a la deriva actual del capitalismo, añorando tiempos mejores en que el capital se comportaba de forma “responsable” permitiendo una competencia “justa”. Sin embargo, como ya señaló el marxismo, hace tiempo que las bases materiales de ese capitalismo ideal desaparecieron: “La eliminación de la competencia por el monopolio marca el comienzo de la desintegración de la sociedad capitalista. La competencia era el principal mecanismo creador del capitalismo y la justificación del capitalista. Por lo mismo, la eliminación de la competencia marca la transformación de los accionistas en parásitos sociales”.²

Proteccionismo y guerra comercial

Desde los medios de comunicación burgueses se culpa de esta situación a la guerra comercial. A pesar de que todos están de acuerdo en que una escalada arancelaria y proteccionista es negativa para el conjunto de la economía capitalista, y que podría llevar a una recesión e incluso a una depresión económica, tal y como ocurrió durante los años treinta del siglo pasado, las tendencias objetivas del capitalismo empujan inexorablemente en dicha dirección. La burguesía desearía frenar este proceso, pero las leyes que rigen su sistema lo hacen hartamente complicado. La recesión fortalecerá esas tendencias, prevaleciendo el sálvese quien pueda.

Las políticas proteccionistas no son una invención de Trump. Desde 2008 países de todo el mundo han aprobado 10.035 normas de proteccionismo económico frente a 3.544 medidas liberalizadoras. Esta dinámica, como en otros momentos de la historia, se ha impuesto fruto de la crisis de sobreproducción y de la necesidad de las distintas burguesías de competir más ferozmente por el mercado mundial.

En el año 2000 China solo superaba a EEUU como principal socio comercial en Cuba, Paraguay, Iraq, Irán, una decena de países africanos y sus países fronterizos en el sudeste asiático. Hoy se ha convertido en el principal socio comercial y exportador de todos los países de África, Asia y Oceanía, y de la mayor parte de Europa y América Latina. EEUU mantiene su preeminencia únicamente respecto a Canadá y México, en Europa con Gran Bretaña, Irlanda, Francia y Suiza, en un par de países en África, y en Centroamérica, Colombia y Ecuador. Este



enorme retroceso del imperialismo norteamericano explica el agravamiento de la guerra comercial y la apuesta estratégica de la burguesía estadounidense por librar esta batalla.

La supuesta tregua alcanzada entre EEUU y China es pura propaganda. Este tipo de acuerdos solo pueden ser parciales y temporales, amenazados ante cualquier nuevo acontecimiento, ya que asistimos a una pugna decisiva por la supremacía mundial entre estos dos actores. Sin embargo, la vociferante retórica nacionalista de Trump no debe llevarnos a confusión. La realidad concreta es que en estos cuatro años de presidencia, su Gobierno y la burguesía norteamericana no han sido capaces de avanzar un ápice en la esfera internacional. Al revés, todos sus intentos de revertir los retrocesos del imperialismo estadounidense han fracasado.

Por eso mismo, semanas después de la firma de la supuesta tregua, el enfrentamiento ha vuelto a estallar en torno a Huawei, acusada ahora por el Gobierno norteamericano de organización criminal por el robo de propiedad intelectual. En 2019 Huawei desplazó a Apple del segundo al tercer puesto mundial en venta de móviles, y en la actualidad cinco de las diez mayores compañías de Internet y telefonía son chinas, mientras que en 2009 las diez eran norteamericanas. Uno de los puntos de mayor enfrentamiento es el desarrollo de la nueva tecnología 5G. China ya ha instalado 400.000 estaciones de 5G, diez veces más que EEUU; ha firmado acuerdos con 60 países para el desarrollo de esta nueva red, muchos

de ellos aliados de EEUU; y se calcula que en 2025 dispondrá de 650 millones de usuarios, el 40% a escala mundial. Los temas centrales de conflicto, los subsidios de Pekín a determinadas industrias, la propiedad intelectual y la guerra tecnológica, han quedado fuera de los acuerdos. El Departamento de Defensa de los EEUU ha advertido que “China se prepara a repetir con el 5G lo que ocurrió con la 4G en EEUU”, transformando “una economía manufacturera intensiva en capital y trabajo, en un sistema liderado por la innovación y el consumo, con una dependencia cada vez menor de la inversión y la tecnología extranjera”.

Polarización social y desigualdad

Toda esta precaria situación en la economía mundial se combina con un crecimiento de la miseria y la desigualdad sin precedentes, confirmándose los vaticinios de Marx y Engels en *El Manifiesto Comunista*. El último informe anual de Intermon Oxfam señala que el 1% más rico de la población tiene el doble de riqueza que 6.900 millones de personas. Al mismo tiempo que se ha duplicado el número de multimillonarios.

La precarización generalizada de la fuerza de trabajo y los bajos salarios han dado lugar en los países desarrollados a la proliferación de la figura del trabajador que, a pesar de tener uno o dos empleos, se mantiene al borde de la pobreza o en la pobreza. Así lo refleja dicho informe: “un trabajador que hoy está ubi-

cado en el 10% de los trabajadores más pobres, debería trabajar tres siglos y medio para conseguir el mismo rédito que un trabajador que se ubica en el 10% de los trabajadores más ricos”. Mientras el 10% de los trabajadores con mejores sueldos reciben casi el 50% de la masa salarial mundial, el 20% con peores retribuciones no llegan al 1%.

Es esta situación la que está detrás de las explosiones y levantamientos revolucionarios en buena parte del planeta, desde Chile o Bolivia, pasando por Argelia, Líbano, Iraq, hasta Francia o Catalunya. Países como EEUU o Gran Bretaña, bastiones en el pasado de la estabilidad capitalista, están corroídos por una polarización social extrema, dando lugar a fenómenos como el de Bernie Sanders. La lucha de clases no da tregua y de ahí el profundo pesimismo existente entre la clase dominante. Las condiciones de la revolución están completamente maduras, pero la ausencia del factor subjetivo, de un partido revolucionario de masas capaz de canalizar la energía, rabia y frustración de la clase obrera y la juventud, no permite culminar el derrocamiento del capitalismo. ¡Esa es por tanto la tarea del momento!

1. Cuatro multinacionales controlan el 84% del mercado de pesticidas, diez el 56% del de fertilizantes, otras diez el 83% del farmacéutico para ganado y tres compañías el 60% del mercado de semillas. En la minería, cinco multinacionales acaparan el 91%, 88% y 62% de la producción mundial de platino, paladio y cobalto, y diez multinacionales el 64%, 52%, 50% y 45% de la producción de níquel, hierro, cobre y zinc respectivamente, así como el 34% y 30% de la de plata y oro. El 72% de las reservas de petróleo y el 51% de las de gas están en manos de una decena de compañías multinacionales, mientras que otras tantas producen el 30% del cemento mundial. También son diez las que acaparan el 25% de la producción mundial de papel y cartón, y trece las que concentran entre el 11 y el 16% de la pesca mundial y entre el 20 y el 40% de las reservas pesqueras. Cinco multinacionales controlan el 90% del comercio mundial de aceite de palma, otras tres el 60% de la producción de cacao, diez el 40% de la producción de café, ocho el 54% de la de soja, tres el 42% de la producción de plátano y cinco el 48% de la producción de salmón.
2. ‘El marxismo en nuestro tiempo’, en *Fundamentos de economía marxista*, León Trotsky, Fundación Federico Engels, 2019.





Sanders avanza en las primarias pese al boicot demócrata

¡Por un partido de los trabajadores y la juventud!



Ana García
Izquierda Revolucionaria
Comisión Ejecutiva

Si los temores de la burguesía ante el creciente apoyo a Bernie Sanders en EEUU estaban justificados hace unos meses, ahora lo están todavía más. Sanders se ha abierto paso con fuerza a pesar de los intentos de pucherazo y de la campaña que el aparato demócrata y los medios de comunicación burgueses libran contra él. Sus victorias en los estados de Iowa, New Hampshire o California, uno de los más importantes, le convierten en el objetivo a batir.

Un apoyo que se sustenta en la miseria creciente y la desigualdad lacerante que se extiende por EEUU, y que no ha hecho más que agravarse bajo el mandato de Trump. Su reforma fiscal benefició al 20% de la población con mayor renta, que dejó de pagar 205.000 millones de dólares, al tiempo que el 14% vive en la pobreza, la mayor cifra desde 2008. Según un reciente estudio de la Universidad de Berkeley, un tercio de los trabajadores de la industria manufacturera depende de los cheques de comida o de ayuda federal para llegar a fin de mes. Por otro lado, la pauperización de la clase media no ha dejado de agravarse. Un buen ejemplo lo encontramos en el campo estadounidense, bastión histórico del conservadurismo republicano, donde la concentración de la riqueza ha llevado a la quiebra a miles de pequeños granjeros y a una tasa de suicidios que triplica la media del país.

El aparato demócrata, impotente frente a Trump y en guerra contra Sanders

La política de Trump ha contado con el apoyo entusiasta de un amplio sector de la burguesía norteamericana y con la com-

plicidad de aquellos que tenían más reticencias. La oposición desplegada por el aparato del Partido Demócrata ha quedado reducida a pura palabrería, permitiendo a Trump finalizar su mandato tras la farsa del *impeachment*. El *establishment* demócrata, que ahora apoya desesperado a Joe Biden, es completamente impotente para frenar a este reaccionario.

Por eso, desde el comienzo de las primarias hemos asistido a una ofensiva contra Sanders que ha tenido como epicentro el aparato del partido. Pesos pesados como Hillary Clinton u Obama han salido a la palestra contra el senador de Vermont. Sus oponentes en las primarias, especialmente Biden, se han sumado a Trump en denunciar a Sanders como un peligroso socialista, y los medios de comunicación han impulsado una campaña venenosa agitando el fantasma del comunismo, criticando a Sanders por defender el sistema sanitario cubano o por rechazar el reciente golpe de Estado en Bolivia.

El intento de pucherazo en el primer estado que celebraba las primarias, Iowa, ha logrado el efecto contrario al perseguido: los seguidores de Sanders han reaccionado aún con más fuerza, conscientes de la guerra abierta. Mítines multitudinarios en Boston o California lo ilustraban a la perfección. A medida que se confirmaba un sólido apoyo a Sanders, a pesar de todas las limitaciones y obstáculos, y especialmente tras la victoria de Biden en Carolina del Sur, el resto de candidatos demócratas se han ido retirando manifestando expresamente su apoyo a Biden.

La última en hacerlo ha sido Elisabeth Warren, la otra gran apuesta del *establishment* demócrata para arrebatar a Sanders el espacio a la izquierda. Tras su retirada ha señalado que aún no va a decir a qué candidato apoyará, evitando pronunciarse por Sanders a pesar de

que sus electores serían más favorables al mismo. El aparato demócrata manobra desesperadamente en todos los frentes de cara a evitar su peor pesadilla, una victoria de Sanders.

Hay que romper con el podrido Partido Demócrata

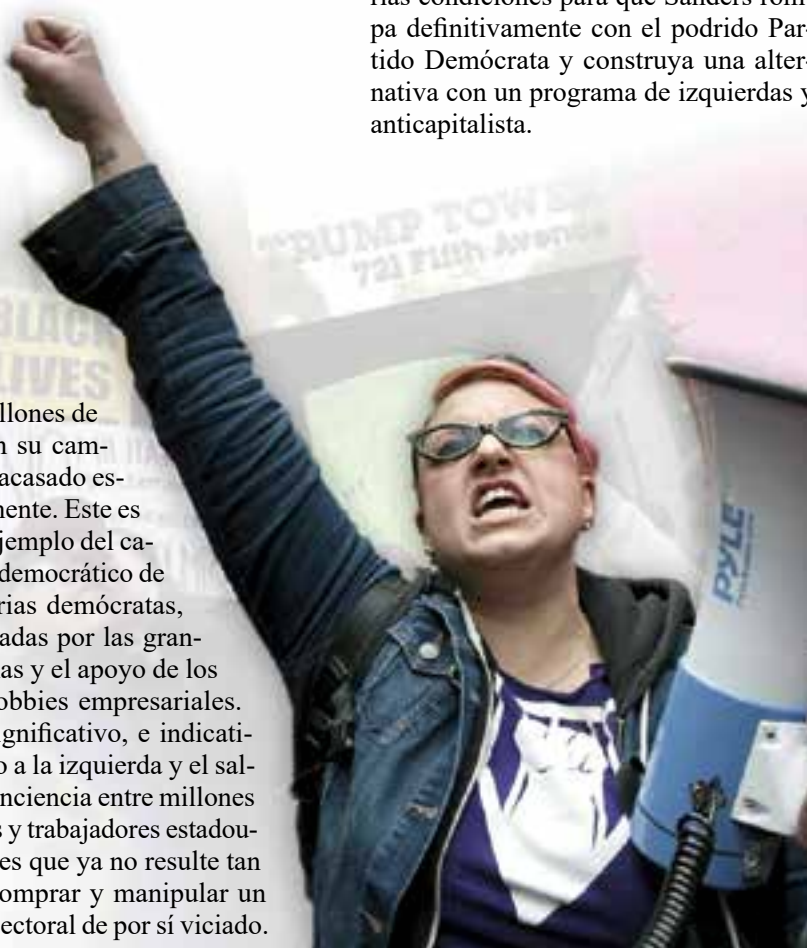
No podemos olvidar que nos encontramos ante un partido completamente comprometido y al servicio de las élites capitalistas. Un buen ejemplo de ello lo hemos tenido con el candidato Michael Bloomberg, el multimillonario exalcalde de Nueva York, que tras invertir más

de 500 millones de dólares en su campaña ha fracasado estrepitosamente. Este es el mejor ejemplo del carácter antidemocrático de las primarias demócratas, condicionadas por las grandes fortunas y el apoyo de los grandes lobbies empresariales. Lo más significativo, e indicativo del giro a la izquierda y el salto en la conciencia entre millones de jóvenes y trabajadores estadounidenses, es que ya no resulte tan sencillo comprar y manipular un proceso electoral de por sí viciado.

Tras todas estas maniobras parece que el *establishment* demócrata ha tenido un respiro. Los resultados del Supermartes han sido presentados como una gran victoria de Biden, que ganaba en diez de los catorce estados en liza. Hay que decir que el sistema de elección es profundamente antidemocrático, ya que los delegados se logran en función de quien gana la mayoría en cada condado. De esta forma candidatos con menos votos pueden lograr más delegados. Pero lo cierto es que a pesar de esto, Sanders se hacía con la victoria en el estado más importante y con mayor número de delegados: California, además de Colorado, Utah o Vermont.

Las reglas del Partido Demócrata han sido diseñadas para evitar "intrusos". Por eso, incluso aunque Sanders llegara a ganar las primarias, la gran Convención Demócrata tiene guardado otro gran as en la manga: los superdelegados (funcionarios del partido, cargos públicos, expresidentes, etc., que nadie ha elegido), que suponen una quinta parte del total de votos en dicha Convención. En el caso de que ningún candidato obtenga los delegados necesarios para asegurarse la victoria, algo prácticamente imposible, los superdelegados son decisivos. En estas condiciones las posibilidades de victoria de Sanders son harto complicadas.

Por eso mismo es un error que Sanders se haya comprometido a apoyar al candidato que salga de esta Convención antidemocrática, en vez de plantear la necesidad de construir una candidatura y un partido de los trabajadores y la juventud, independiente de la plutocracia demócrata. El Partido Demócrata es un pilar de la burguesía, no hay posibilidad de reformarlo. Harán todo por evitar que Sanders sea el candidato frente a Trump, a pesar incluso de ser el candidato con más posibilidades de vencerle, tal y como señalan numerosas encuestas. Todo este tsunami que se ha abierto paso contra viento y marea revela las extraordinarias condiciones para que Sanders rompa definitivamente con el podrido Partido Demócrata y construya una alternativa con un programa de izquierdas y anticapitalista.



Afiliate a IZQUIERDA REVOLUCIONARIA y construye con nosotros las fuerzas del marxismo internacional

ANDALUCÍA: Cádiz 682 276 436 · Córdoba 619 033 460 · Granada 616 893 592 · Huelva 695 618 094 · Málaga 611 477 757 · Sevilla 600 700 593 · ARAGÓN: Zaragoza 640 702 406 · ASTURIAS: 686 680 720 · CASTILLA-LA MANCHA: Guadalajara 949 201 025 · Puertollano 650 837 265 · Toledo 699 956 847 · CASTILLA Y LEÓN: Salamanca 653 699 755 · CATALUNYA: Barcelona 933 248 325 · Tarragona 660 721 075 · EUSKAL HERRIA: Araba 945 231 202 · Bizkaia 664 251 844 · Gipuzkoa 685 708 281 · Nafarroa 635 919 738 · EXTREMADURA: 638 771 083 · GALIZIA: A Coruña 678 420 888 · Compostela 637 809 184 · Ferrol 626 746 950 · Ourense 604 024 366 · Vigo 679 500 266 · MADRID: 914 280 397 · PAÍS VALENCIÀ: 685 098 482

www.izquierdarevolucionaria.net • contacto@izquierdarevolucionaria.net • @IzquierdaRevol



Miriam Mucio
Izquierda Revolucionaria
Comisión Ejecutiva

III Asamblea Ciudadana de Podemos

¿Asaltar los cielos o sostener el régimen del 78?

La entrada de Podemos en el Gobierno ha adelantado en un año la III Asamblea Ciudadana, que se celebrará el 21 de marzo, con el fin de justificar la coalición con el PSOE y “ajustar” el partido a las necesidades de unos dirigentes convertidos ya en “hombres y mujeres de Estado”. Así lo proclaman sin disimulo desde la dirección morada: “Los documentos que tenemos están hechos para ser un partido de oposición. Adaptarlos a un partido de gobierno es una de las claves de esta asamblea”.

Pasar de representar un movimiento de masas histórico y que pretendía confrontar con la casta política y económica del sistema para transformarse en un gestor “progresista” del régimen exige necesariamente “ajustes” de gran calado.

¿Es la Constitución un medio para frenar a la reacción?

Los argumentos para pactar la coalición con el PSOE han sido fundamentalmente dos: frenar a la extrema derecha y obligar a la socialdemocracia a hacer una política de izquierdas.

“La Constitución del 78, con todos sus defectos, contiene artículos que son la mejor vacuna para defender a las mayorías sociales del auge de la extrema derecha”, decía Pablo Iglesias en un acto el pasado diciembre, a la vez que señalaba que ahora “cuando hay un reforzamiento de las fuerzas reaccionarias, no es el momento del rupturismo sino del posibilismo”.

Este texto, que tanto aprecia la “casta”, sancionó la monarquía impuesta por la dictadura otorgándole mecanismos extraordinarios para intervenir políticamente. Lo hemos visto con el artículo 155 y el papel del rey encabezando la ofensiva contra el pueblo catalán. Pero hay más. Señala a las Fuerzas Armadas como garantía de la “sagrada unidad de la patria” negando el derecho de autodeterminación. Garantiza la economía de mercado y antepone el pago de la deuda a la banca por encima del gasto público. Todos los artículos referidos a los derechos sociales son incumplidos con el respaldo de todos los tribunales y la legalidad del 78.

La Constitución no es ningún dique de contención contra la ultraderecha. El avance de Vox, como de toda la extrema derecha en Europa, ha sido allanado por años de recortes sociales, por una desigualdad lacerante, por la descomposición de una democracia burguesa al servicio de los privilegios de la oligarquía y por el naciona-

lismo españolista. Y el PSOE ha tenido una responsabilidad cardinal en todo ello.

No, al fascismo solo se le derrotará mediante la lucha de masas, y defendiendo un programa socialista que ponga fin a los recortes y a la ofensiva contra los derechos democráticos.

¿Hará la socialdemocracia una política de izquierdas?

La participación de Podemos en el Gobierno es una garantía a la socialdemocracia, y a la clase dominante, de que la formación morada se aparta definitivamente de la calle y de una política anticapitalista.

Atrapar a Podemos en los mecanismos de la política institucional y del cretinismo parlamentario no es algo anecdótico para el PSOE ni para la burguesía que, como siempre hace con las organizaciones reformistas, primero las usa y cuando están suficientemente desprestigiadas las tira a la basura.

Renunciando a la fuerza del movimiento obrero y la juventud para transformar la sociedad, Iglesias recurre al argumentario del reformismo más estéril e impotente: “Hay que hacer entender, empezando por la militancia y el votante, que esto va poco a poco (...). Hay que hacer cambios poco a poco para que nuestras políticas sean más aceptadas”. ¿Por quién? ¿Por la patronal, por la banca?

Los dirigentes de Podemos señalan que una de sus prioridades será “demostrar más que nunca que somos una fuerza confiable para estar en el Gobierno”. Para la socialdemocracia hacer algunas concesiones menores, que no cambian el fondo de su agenda neoliberal, es una ganga. Si Podemos acepta jugar el papel de pata izquierda en un Ejecutivo cuyas carteras clave están en manos del poder económico, si traga con el equilibrio presupuestario, con la negativa al derecho a la autodeterminación, con la impunidad de los torturadores y represores que siguen incrustados en el aparato estatal, con la legislación represiva heredada del PP, con las políticas racistas de las devoluciones en caliente, con los desahucios, con

el deterioro de la enseñanza pública, con aplausos al rey o tapando sus vergüenzas y corruptelas... el negocio es redondo.

El nuevo “código ético” o los privilegios de la política burguesa

A una política socialdemócrata y reformista corresponde un modelo de partido reducido a una maquinaria electoral, a la supresión real de la democracia interna, y un modo de vida privilegiado para sus dirigentes. La maquinaria del Estado está muy bien engrasada, y asimilar a los dirigentes de las organizaciones de izquierdas ha sido, y sigue siendo, una de las principales vías para que la burguesía asegure su dominio.

La eliminación del tope salarial para los cargos de Podemos, prevista en la reforma de su código ético, es un paso evidente en esta dirección. Hasta ahora existía “formalmente” un tope salarial equivalente a tres SMI, y ningún cargo público estaba obligado a donar si cobraba menos. Según el nuevo documento “el SMI deja de ser un marco de referencia válido para la limitación salarial de nuestra organización. A partir de ahora, las donaciones serán realizadas mediante porcentajes del salario percibido en función de las responsabilidades asumidas”, eliminando de un plumazo el tope máximo de ingresos.

El propósito es asegurar definitivamente los privilegios salariales dentro de Podemos y consolidar un aparato burocrático que garantice su apoyo incondicional a la dirección. Un aparato que se sacuda cualquier responsabilidad de presentar cuentas a la militancia, que no podrá ejercer ninguna forma de control más allá de votar por Internet en las consultas que un reducido equipo de dirigentes decide. Hay que recordar cuál fue la deriva del PSOE iniciada con Felipe González: primero se renunció a los principios y se abandonó el marxismo; después se justificaron todas las concesiones a los capitalistas y, paralelamente, se impuso el arribismo y los privilegios materiales para los cargos y funcionarios del partido.

Respecto a las donaciones, “serán realizadas mediante porcentajes del salario percibido en función de las responsabilidades asumidas”. El porcentaje podría situarse entre un 5% y un 30% ¡¡como máximo!! Incluso en el caso de que se aplicara el 30% a los ingresos más altos, que pueden rondar los 100.000 euros anuales, la remuneración resultante no tendría nada en común con la que perciben la inmensa mayoría de los trabajadores y jóvenes, pero sí mucho con la que recibe cualquier político burgués.

Esa medida es indicativa del giro a la derecha que se ha ido fraguando en estos seis años de existencia, y que tendrá en la III Asamblea un punto de inflexión. También de la profundidad del divorcio de la dirección de Podemos con las mejores tradiciones del movimiento obrero. ¿Cómo se creen que se financiaron los partidos, sindicatos y movimientos de la izquierda en la lucha contra la dictadura? Con el sacrificio militante de quienes apenas tenían recursos, pero sí dignidad de clase y voluntad revolucionaria. Si se quiere representar a la clase obrera y a la juventud no se puede vivir como un privilegiado. Nuestra consigna hoy y siempre es: ¡Diputado obrero, sueldo obrero!

O se defiende una alternativa revolucionaria al capitalismo con todas las consecuencias o se acaba siendo un servidor del sistema. Su conversión a las reglas del sistema es la prueba de un fracaso político. Aquellos que quieren cuadrar el círculo, conciliar intereses irreconciliables y construir “un capitalismo con rostro humano” basado en el “realismo”, lo que hacen es apuntalar a nuestros opresores y poner obstáculos en el avance de la conciencia y la organización. Pero la lucha de clases no da tregua: hoy más que nunca hay que construir una izquierda revolucionaria que no ceda, que no renuncie y que levante con fuerza la bandera del socialismo. Tenemos la fuerza para hacerlo. ¡Sí se puede!

Puedes leer el artículo completo en izquierdarevolucionaria.net





El Gobierno da por buena la política racista de Bruselas



Alejandro García
Izquierda Revolucionaria
Madrid

El pasado 13 de febrero el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) emitió una sentencia avalando la expulsión “en caliente” del territorio español de dos migrantes marroquíes que saltaron la valla de Melilla en 2014. Dicho tribunal daba así la razón al Gobierno del PP, que deportó de forma inmediata a estas dos personas sin ningún tipo de juicio ni procedimiento administrativo que les permitiese la más mínima garantía de defenderse ante esta injusticia.

En su resolución el TEDH afirma que estas personas renunciaron a cualquier derecho básico y fundamental al haber accedido al territorio español de forma “irregular” y establece que fueron ellos mismos quienes se pusieron “de forma voluntaria” en una situación de ilegalidad.

Devoluciones “en caliente” y vallas más altas

Esta terrible actuación, totalmente contraria a los principios ideológicos de cualquier organización que se reclame de izquierda, y que supone un ataque brutal a los derechos humanos, ha sido respondi-

da por el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos (UP) con la lamentable afirmación de que lo “respetan y acatan”. Muy lejos quedan las declaraciones de Pedro Sánchez cuando en la oposición decía “rechazar rotundamente las devoluciones en caliente” y prometía acabar con estas prácticas.

Por su parte, desde la dirección de UP se insistió en que la eliminación de los CIEs y la derogación de la ley de extranjería serían algunas de las principales medidas a llevar a cabo si entraban en el Gobierno. Los hechos, una vez más, contradicen los discursos, y la supuesta defensa de los sectores más humildes y desprotegidos queda en palabras vacías propias de embaucadores.

Aunque es cierto que la resolución del TEDH ha provocado ciertas fricciones entre los ministros de UP y del PSOE, estas se han resuelto rápidamente. Mientras en un penoso intento de lavarse la cara, el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, declaraba que el Ejecutivo no volvería a realizar devoluciones en caliente, el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, insistía en que “la figura legal del rechazo en frontera sigue vigente y volverá a ser utilizada en caso de necesidad en las vallas que separan las ciudades autónomas de Marruecos”.

Se trata ni más ni menos que de una nueva concesión de la formación morada, que justifica en aras de poder seguir garantizando la gobernabilidad y continuar demostrando su “sentido de Estado”, en una dinámica que les separa cada vez más de las necesidades y expectativas de su base social, que ve cómo son absorbidos por las instituciones del sistema. Otro ejemplo de ello, es el respaldo de los ministros de Unidas Podemos al anuncio del ministro del Interior, Grande-Marlaska, de ampliar la longitud y altura de la valla fronteriza de Melilla —para compensar la retirada de las concertinas y tratar de limpiar sus conciencias— que en algunos tramos llegará a ser hasta un 30% mayor de lo que es ahora.

A esto hay que sumar el reciente posicionamiento del Gobierno contra la autodeterminación del pueblo saharauí. Otra histórica reivindicación de la izquierda que es fulminada para contentar a los grandes empresarios españoles que tienen suculentos negocios con el régimen marroquí. Con estos precedentes, nos tememos que la reforma de la ley de extranjería que se propone abordar el ministro de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, José Luis Escrivá, no va a cambiar un ápice su carácter reaccionario.

Para completar el cuadro nos encontramos con la necesidad urgente de reforzar y mejorar una red de acogida insuficiente e ineficiente, una tarea para la que el Gobierno ha tenido bonitas palabras pero ninguna medida ni presupuesto efectivo.

Estas medidas suponen en la práctica seguir criminalizando a los migrantes, sin combatir el discurso reaccionario de culpar a los inmigrantes de las carencias de los servicios sociales, de la precariedad y el paro, de la delincuencia, etc. En lugar de dar una batalla contra los prejuicios racistas y ofrecer una vida digna a todas las personas, en lugar de explicar que ni los controles de fronteras, ni los muros y concertinas, ni las “devoluciones en caliente”, ni las leyes de extranjería, ni el endurecimiento de las políticas de asilo..., van a terminar con las políticas de austeridad, con los recortes sociales ni los ataques a los derechos democráticos que estamos sufriendo, la socialdemocracia y los reformistas, del PSOE o de UP, se hacen eco en esencia del discurso de la derecha. Así, termina haciendo lo que el PP: tratarlos como presos y hacinarlos por miles en CIEs o en barcos, cuando no criminalizarlos.

Levantar un programa de lucha, socialista e internacionalista

La Unión Europea ha legalizado una política migratoria que se diferencia bastante poco de la aplicada por los Gobiernos ultraderechistas y reaccionarios europeos o de Trump en EEUU, allanando el camino para que ganen influencia entre sectores de las capas medias golpeadas y empobrecidas y sectores atrasados de la clase obrera.

Sin ir más lejos, la UE ha felicitado al Gobierno griego por su criminal actuación contra los refugiados, en su mayoría sirios, que tratan de entrar en Europa huyendo de la guerra. ¿Y esta es la UE que clama a los cuatro vientos la necesidad de poner “un cordón sanitario” a la extrema derecha? Nos encontramos ante una muestra más de la podrida moral de los capitalistas y de sus instituciones.

Frente a la demagogia capitalista que señala a nuestros hermanos migrantes como los culpables de nuestra miseria para dividir a la clase obrera y así desviar la atención del auténtico responsable, el sistema capitalista, es necesario organizar la lucha en base a un programa que unifique las reivindicaciones de la clase obrera por encima de las fronteras. Un programa para combatir los planes de austeridad y los recortes sociales, que defienda la nacionalización, bajo control democrático de los trabajadores, de la banca y de los grandes monopolios para que toda la riqueza que generamos con nuestro trabajo sea empleada para resolver las graves necesidades sociales que nos acucian, poner fin al desempleo de masas y asegurar una vida digna a todas y todos.



Tarragona: ¡Retirada de la multa a Nicolás Vettas!

¡Basta de arbitrariedad y racismo policial!

El 6 de noviembre Nicolás Vettas recibió una comunicación del Ajuntament de Tarragona imponiéndole una multa de 400 euros por una denuncia de la Guardia Urbana. Esta denuncia se produjo a causa de hechos ocurridos mientras desempeñaba su trabajo como educador social responsable de un grupo de Menores Extranjeros No Acompañados (MENA). Increíblemente, ni en la denuncia presen-

tada, en la cual los agentes le acusan de “originar desórdenes de gran intensidad en espacios o establecimientos públicos”, ni en el expediente abierto por el Ajuntament se cita ni un solo hecho que apoye esa acusación.

Toda la información del caso y un modelo de resolución de protesta en www.izquierdarevolucionaria.net



El **CORONAVIRUS** desnuda la catástrofe social del capitalismo



Izquierda Revolucionaria
Comisión Ejecutiva

Aunque los Gobiernos capitalistas y los grandes medios de comunicación quieran ocultarlo, la pandemia de coronavirus señala directamente a décadas de contrarreformas neoliberales y su estela catastrófica de recortes salvajes y privatización de la sanidad pública.

En el momento de escribir este artículo y según datos oficiales, el virus ha infectado en todo el planeta a más de 110.000 personas y ha causado más de 4.000 muertes, la mayoría en la China continental. En Asia, el país más afectado después de China es Corea del Sur con 7.382 casos y 51 muertos, seguido de Irán donde hay 6.566 afectados y 194 defunciones. En Rusia, donde se han diagnosticado 17 casos, el Gobierno de Putin ha cerrado la frontera con China, mientras Turquía, Pakistán, Jordania y Armenia han hecho lo mismo con Irán.

En Europa, Italia supera ya los 8.000 afectados y las 500 muertes, y el Ejecutivo de Giuseppe Conte ha extendido la cuarentena forzosa de 16 millones de personas —Lombardía (Milán) y otras 14 provincias de las regiones de Piamonte, Emilia Romagna y Véneto— a la totalidad de la población del país, en medio de una situación de colapso de su sistema público sanitario. Desbordados por una crisis que no pueden frenar, la clase dominante italiana ha provocado un auténtico *shock* entre la población, generando una psicosis de miedo para ocultar su responsabilidad en este desastre. Ahora, las consecuencias, no solo en muertes y contagiados también con miles de despidos, las pagará la clase trabajadora y los sectores más golpeados por años de crisis.

La situación en otros países europeos no es mucho mejor, y la progresión de contagios y fallecidos se sucede. En el Estado español son ya 1.300 los afectados y 30 los fallecidos.

La miseria y el capitalismo salvaje están detrás de esta crisis

Hay varios elementos que explican el surgimiento y el desarrollo de la epidemia en China. El primer factor son una condiciones de trabajo, habitacionales, medioambientales y de higiene profundamente degradadas, provocadas por años de contrarreformas sociales y privatización del sistema de salud. En China la renta media *per cápita* no llega a los 3.000 dólares anuales, bajando hasta los 1.500 en las zonas rurales donde vive el 53% de la población del país. Aquí, la mayoría trabaja lejos de cualquier centro sanitario, sin agua corriente y alcantarillado. En lo que respecta a la mayoría de la población urbana, un 60% de la mano de obra realiza seis turnos de trabajo semanales de alrededor de 13 horas. Para millones, el cansancio extremo, la explotación laboral y la pobreza son una dolorosa realidad.

Las condiciones ambientales también son deplorables. En zonas urbanas, la media de micropartículas suspendidas en el aire supera en 15 veces el máximo reco-



mendado por la OMS: al año fallecen 1,6 millones personas por enfermedades vinculadas a la polución, una quinta parte de las muertes de este tipo a nivel mundial. La nefasta situación del sistema sanitario, en su mayor parte privatizada, no hace más que añadir leña al fuego, hasta el punto de que el 32% de los gastos médicos son pagados por los pacientes.

El capitalismo chino supone el contexto ideal para provocar un brote vírico, y la negligencia burocrática del régimen no ha hecho más que ayudar a que se convierta en epidemia. La ocultación de datos sobre el número de infectados y la lentitud a la hora de aislar y tratar a los primeros enfermos han sido determinante para que se haya extendido a todo el país y haya traspasado sus fronteras. Si en China la actuación del Gobierno ha sido lamentable, el occidente capitalista no le va a la zaga.

La pobreza, la falta higiene o infraestructuras sanitarias suponen el día a día para miles de millones de personas en todo el mundo y el coronavirus es una nueva lacra a sumar. Los datos sobre la expansión de esta epidemia en África son muy escasos, conociéndose la existencia de algunos afectados en Egipto, Marruecos, Argelia, Nigeria o Sudáfrica. Pero no cabe la menor duda de que esta nueva plaga se sumará a las epidemias de sarampión, ébola, meningitis, cólera, etc., que ya asolan el continente.

Es innegable que en el mundo capitalista desarrollado existen unas infraestructuras sanitarias incomparablemente más avanzadas, pero estas también van a ser sometidas a una dura prueba tras años de profundos recortes. En EEUU, en un contexto en el que millones de personas están demandando un sistema de salud público, gratuito y universal, la extensión del coronavirus puede convertirse en un acicate para esta lucha. En el caso de Europa, la sanidad pública ha sufrido recortes de miles de millones de euros en todos los países, con consecuen-

cias brutales para los enfermos de familias trabajadoras y que ahora empeoran ante la pandemia.

Del impacto económico a la crisis política

Si el impacto del coronavirus en la economía se ha hecho evidente, igual de importante son las sacudidas políticas y sociales que puede provocar. En Italia, a pesar del silencio cómplice de los sindicatos y del Partido Democrático (PD), esta crisis puede desencadenar un estallido de movilizaciones si los efectos empeoran.

En el Estado español, el Gobierno de coalición ha mantenido una actitud extremadamente pasiva. Mientras escribimos este artículo el 9 de marzo, Pedro Sánchez ha anunciado un “plan de choque” sin concretar detalles, salvo que no hay “que precipitarse”. Sin embargo, la descoordinación y la alarma ya han saltado por todas partes. En Vitoria las clases han sido suspendidas durante 14 días prorrogables, y en la Comunidad de Madrid la suspensión afectará a un millón y medio de estudiantes de infantil a universidad por el mismo periodo de tiempo. ¿Quién se va a hacer cargo del cuidado de estos niños? El Gobierno tiene que garantizar que los padres estén liberados de ir a trabajar, con el 100% de su salario y sin computar vacaciones, para hacerse cargo de este sacrificio que nos imponen por su ineptitud. Desde el Ministerio de Sanidad también han llamado a la población a “no saturar los servicios sanitarios” y, si tienes síntomas de estar contagiado, mantener la cuarentena en casa. Esto es pasar toda la responsabilidad por la falta de medios materiales y humanos a los propios enfermos, ¡es completamente inaceptable!

A tenor de lo que está sucediendo en el mundo, y que los tambores de recesión económica baten con fuerza, es necesario que desde la izquierda política y sindical combativa exijamos al PSOE, a Unidas

Podemos y a los sindicatos de clase mayoritarios que dejen de mirar para otro lado y pongan en marcha medidas drásticas para aumentar los recursos sanitarios, y garantizar así que los trabajadores no pagamos los platos rotos de esta catástrofe con más recortes, más despidos y más pobreza.

Este Gobierno debe contratar inmediatamente a miles de sanitarios, médicos, enfermeras y enfermeros, investigadores y poner a pleno funcionamiento los centros hospitalarios, dotándolos de todos los medios técnicos necesarios. Basta de regalar recursos públicos a las empresas privadas del negocio sanitario y a los grandes monopolios farmacéuticos ¡Nacionalización del sector farmacéutico ya, e inversión de choque en la investigación sanitaria para resolver las carencias de la sanidad pública! Gratuidad completa de todos los tratamientos médicos y medicamentos necesarios. Ningún despido, ERTE o ERE al amparo del coronavirus ¡que los empresarios pongan su parte de todos los beneficios acumulados estos años! Exención de trabajar con el 100% del salario, que no sea computado como vacaciones, para todos los asalariados que tengan que ocuparse de enfermos, ancianos o de sus hijos por el cierre de las aulas. Control y reducción de precios de los productos fundamentales para la vida diaria de las familias trabajadoras y persecución contundente de la especulación.

¡Que la crisis la paguen los responsables de los recortes sanitarios y sociales: los capitalistas!

¡En defensa de la sanidad pública y de los derechos de las familias trabajadoras!



Gobierno PSOE-UP: media

¡ASÍ

¡Poner fin a lo y derogar las c

Han transcurrido dos meses de Gobierno de coalición, pero las medias tintas, las renuncias inaceptables y la política de gestos lo domina todo. Un análisis somero de las medidas gubernamentales, especialmente publicitadas por los ministros y ministras de Unidas Podemos como una “ruptura” con el pasado, revelan mucho ruido pero muy pocas nueces. Tampoco es casual que el PSOE ceda todo el protagonismo mediático a Pablo Iglesias, Alberto Garzón o Yolanda Díaz: es la mejor forma de atarles al régimen del 78, mientras en los asuntos de fondo las políticas procapitalistas se mantienen.

Los empresarios están contentos

La subida del SMI ha sido presentada como el gran logro de estas semanas. No hay que olvidar, sin embargo, que los 50 euros de incremento quedan muy lejos de la promesa de un SMI de 1.200 euros que se aplaza al final de la legislatura. Obviamente, millones de trabajadores, especialmente los peor pagados, han visto esta decisión con satisfacción. Pero la patronal también, pues a cambio de este incremento modesto, que en multitud de empresas se puede orillar gracias a la legislación laboral y la extrema precariedad, el Gobierno de coalición se ha comprometido a no derogar la reforma laboral del PP.

La segunda “gran medida” anunciada tiene que ver mucho con lo anterior. La supuesta anulación del despido por enfermedad se ha quedado muy lejos de lo prometido en campaña electoral. El nuevo decreto de la ministra Yolanda Díaz ni prohíbe ni limita el despido a personas en situación de baja médica, sino que, en el mejor de los casos, encarece su coste si son declarados improcedentes.

En el terreno laboral hay otras noticias, y muy malas. Concretamente el anuncio del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, de incrementar la edad de jubilación efectiva y además incentivar los fondos privados de pensiones. En su comparecencia ante la Comisión del Pacto de Toledo, el ministro “socialista” señaló que por cada año que se retrase a la edad real de jubilación se resuelve “un 25% del problema”. “Es una palanca potentísima”. Es el mismo planteamiento que la patronal, la banca, la derecha y la burguesía europea vienen exigiendo desde hace mucho tiempo. ¿Respondarán Pablo Iglesias y los dirigentes de Unidas Podemos esta nueva medida neoliberal precisamente cuando el movi-

miento pensionista llena las calles y fue un factor clave para derrotar a la derecha en las urnas?

El “giro social” que prometía este Gobierno ha empezado a agotarse casi antes de nacer, sin que la presencia de los ministros de Unidas Podemos haya marcado la diferencia. Los hechos hablan por sí solos.

Una de las medidas que más expectativas levantó, la ley promovida por Alberto Garzón, ha significado una cesión en toda regla ante los grandes empresarios del juego y las casas de apuestas. Tan solo unas ligeras restricciones horarias a los anuncios publicitarios de estos establecimientos, tan inocuas que una de las principales firmas del sector, Codere, subió en bolsa un 7,5% nada más conocerse el proyecto del ministro “comunista”. En esencia, estos monopolios podrán campar a sus anchas incrementando sus beneficios a costa de extender la ludopatía entre la juventud y arruinando a miles de familias obreras.

Lejos de constituir la “garantía de la recuperación de los derechos arrebatados”, como hace apenas dos meses proclamaban sus líderes, UP se está convirtiendo en el parachoques que el PSOE necesita para proteger su flanco izquierdo y asegurar la paz social.

El boicot a la huelga general de Euzkai Herria del pasado 30 de enero o su oposición a una huelga general feminista este 8 de marzo muestran los errores de fondo de la estrategia de Iglesias y Garzón. Es precisamente al revés: si queremos revertir los recortes y conquistar nuevos derechos, se necesita una movilización contundente y un cambio radical en la política económica y social.

De víctimas de las cloacas del Estado a guardianes de sus secretos. CNI, caso Couso y la corrupción de Juan Carlos I

Los vínculos del PSOE con el poder financiero y su completa fusión con el aparato del Estado heredado del franquismo no son nuevos. Se empezaron a forjar en los años de la Transición y se consolidaron bajo los Gobiernos de Felipe González, y ni Pedro Sánchez, ni, por supuesto, los máximos dirigentes empresariales tienen el más mínimo interés en que ese vínculo se debilite.

Para el PSOE es también un objetivo que UP entre por este aro. Y así, Pablo Iglesias, por orden directa de Sánchez, se integrará en la Comisión de Control del

Centro Nacional de Inteligencia (CNI), convirtiéndose en un guardián más de los secretos de Estado. Iglesias se ha jactado recientemente de este “logro” en un mitin en A Coruña cuando afirmó: “Amigos de las cloacas, estamos en el Gobierno”. Pero es más que dudoso que las cloacas del Estado capitalista, es decir, que el aparato judicial, policial, militar y los servicios de inteligencia, muestren algún temor.

Las manifestaciones de los dirigentes de UP respaldando la sumisión del Gobierno ante la dictadura marroquí y el abandono del pueblo saharauí, la aceptación sin ningún pero de la legislación racista europea contra los inmigrantes y refugiados, de las devoluciones en caliente y las restricciones a la ley de asilo, lejos de atemorizar a la clase dominante les confirma que su lealtad, como “hombres y mujeres de Estado”, está pasando la prueba.

Pero hay más. El presidente Sánchez ha dejado claro que el Gobierno recurrirá la sentencia de la Audiencia Nacional que obliga al Estado a indemnizar a la familia de José Couso, cámara de televisión asesinado por militares estadouni-

denses en Iraq en 2003. Para el Ministerio de Asuntos Exteriores el recurso evitará que se sienta un precedente. Este no es un aspecto secundario. José Couso fue una víctima de la intervención militar imperialista de EEUU en Iraq, como lo fueron cientos de miles de civiles que murieron y lo perdieron todo después de que el ejército y las multinacionales norteamericanas devastaran el país. Desde “fuentes del grupo parlamentario de UP” se han hecho unas tímidas manifestaciones de discrepancia para ocultar lo esencial: su participación en un Gobierno de coalición que se mantiene fiel a sus com-



as tintas y renunciaciones inaceptables

¡No!

Los recortes sociales contrarreformas ya!

promisos con el imperialismo estadounidense y europeo.

El último frente que ha estallado afecta a la corrupta monarquía española, y contribuirá a elevar mucho las contradicciones de este Gobierno. Juan Carlos I ha sido denunciado en Reino Unido por su examante, Corinna Larsen, por amenazas del CNI para que no revele “secretos de Estado”. Una decisión tomada por la compañera de andanzas del Borbón, después de que se destapara la investigación secreta de un fiscal suizo que la implica a ella y al rey emérito por los 100 millones de euros que ambos recibieron de Arabia Saudí en pago a su “mediación”

en el concurso de adjudicación del AVE a la Meca.

Ante el escándalo, ERC y Compromiso han solicitado una comisión en el Parlamento, que Unidas Podemos ha apoyado. El PSOE ya ha confirmado que, junto al PP, Cs y Vox, bloqueará esta iniciativa. Blindar la corrupción sistemática que ha enriquecido a una de las cabezas más visibles del régimen del 78 es una labor de los partidos del régimen. Pero, ¿qué harán Iglesias y Garzón? ¿Contribuirán a mantener este “orden legal vigente”?

Más gestos que encubren nuevos peligros. El delito de “apología del franquismo”

Para atajar la frustración que empiezan a sentir sectores de la juventud y la clase trabajadora, desde el Gobierno se lanzan iniciativas como la inclusión en el código penal de la apología del franquismo, que aunque suena muy “radical” en realidad está vacía de contenido y podría transformarse en una amenaza para todos aquellos que combatimos el régimen del 78 y el capitalismo.

El ejemplo de Alemania es ilustrativo: país donde está prohibida la apología del nazismo, la exhibición de sus símbolos y el saludo fascista, lo que no ha impedido las acciones terroristas de los grupos nazis durante décadas, ni el florecimiento de la extrema derecha. Alternativa por Alemania (AfD) entró en las últimas elecciones en el parlamento federal con más del 12% de respaldo, pero su avance lo han asfaltado las políticas de recortes y austeridad del Gobierno de coalición de la CDU y el Partido Socialdemócrata (SPD)

En el Estado español, si el franquismo sigue incrustado en el aparato estatal es porque no desapareció con la Transición. La misma burguesía que había sostenido a la dictadura durante cuarenta años, optó por un acuerdo con el PCE, PSOE y los sindicatos para sortear la crisis revo-

lucionaria de los años setenta. La Constitución de 1978 legalizó ciertos derechos democráticos que ya habían sido arrancados con la lucha de masas, pero el poder siguió firmemente controlado por los capitalistas. Mientras, se blanqueó a la monarquía de Juan Carlos I, y los jueces, militares, mandos policiales, altos funcionarios... protagonistas activos de los años del fascismo, continuaron en sus puestos.

El PSOE, con el aplauso actual de los dirigentes de UP, habla mucho contra la ultraderecha, pero apoyando la represión contra el pueblo catalán, cerrando filas con la derecha para criminalizar a los dirigentes independentistas y condenarlos a largas penas de prisión y utilizando como arma electoral el españolismo más rancio, abona el terreno donde la reacción crece.

Una ley para tipificar como “delito” la apología del franquismo, en manos de los mismos jueces y tribunales franquistas que juzgan y condenan a sindicalistas, raperos, activistas sociales, que absuelven a violadores, corruptos y fascistas, es una manera de ocultar que el PSOE ha sido incapaz de depurar el aparato del Estado de fascistas, de juzgar los crímenes del franquismo y a sus responsables, que no ha reparado a sus víctimas pero ha mantenido las medallas a los torturadores, y que bajo sus Gobiernos las cunetas siguen llenas de fosas clandestinas con los restos de miles de combatientes republicanos.

Estamos seguros de que, si algún día ve la luz, esta ley solo servirá para que una judicatura trufada de franquistas restrinja aún más la libertad de expresión, y sirva como excusa para perseguir a luchadores y militantes de izquierda bajo el epígrafe de “delito de odio”.

Cataluña y la “mesa de negociación”

Una de las concesiones más graves de la izquierda reformista en los años setenta, y que fue sancionada por la Constitución, fue la negación del derecho de autodeterminación para Cataluña, Euskal Herria y Galiza y que el ejército garantizara la unidad sagrada de la patria española.

Ante un movimiento de masas a favor de la república catalana que ha llenado las calles con millones de manifestantes, y después de certificar que la estrategia represiva del Estado y del bloque españolista ha fracasado, PSOE y UP han iniciado el camino del “diálogo” con la Generalitat. Pero la simple aceptación de una mesa de negociación para resolver el “conflicto catalán” no cambia nada sustancial. En la medida que el Gobierno de coalición no está dispuesto a reconocer el derecho a la autodeterminación, esa mesa no servirá ni para satisfacer las aspiraciones del pueblo catalán, ni para contrarrestar el veneno del nacionalismo reaccionario impulsado por PP-Vox-Ciudadanos.

Para los dirigentes del PSOE y de UP, para ERC y sectores de la derecha catalanista, la mesa de negociación permitiría “enfriar” la crisis, y en un contexto más “calmado” llegar a un “acuerdo realista” en la senda del autonomismo. Pero el pueblo catalán, pese a la represión y a los jarros de agua fría recibidos, mantiene intactas sus aspiraciones de conseguir una república que traiga un cambio político y social profundo. No se conformará con una pantomima de negociación. El masivo acto de Puigdemont en Perpinyà refleja parte de esto. El expresidente en el exilio es un político burgués neoliberal pero no es tonto. Intenta conectar con los amplísimos sectores que no están dispuestos a dar carpetazo a esta rebelión social, y asegurarse así unos buenos resultados en las próximas elecciones catalanas.

Si se quiere responder a las aspiraciones del pueblo catalán y poner freno a la ultraderecha, el Gobierno debería empezar por defender el derecho democrático a la autodeterminación, la amnistía de los presos y exiliados independentistas, y la anulación de la sentencia infame del Supremo. Esto debería ir acompañado de la derogación inmediata de la ley mordaza y todas las disposiciones legales aprobadas en los últimos años para restringir la libertad de expresión, organización y manifestación.

La lucha de clases y el conflicto social no se detienen

Ante la clase obrera sigue abriéndose un horizonte de paro, precariedad y deterioro de sus condiciones de vida, mientras las perspectivas para la juventud son cada vez más difíciles; y todo ello podría agravarse si se desata una nueva recesión económica. Pensar que esta situación se puede revertir con gestos y propaganda vacua, sin enfrentarse al poder financiero, a los grandes monopolios y al aparato estatal, es una completa ilusión.

Solo la movilización de los trabajadores y de la juventud con un programa socialista de verdad, que se enfrente decididamente al poder de una minoría parasitaria, podrá poner fin a la pesadilla del desempleo, la precariedad y la falta de futuro. Si UP, abandonando su subordinación al PSOE y a sus políticas proempresariales volviere con todas sus fuerzas a las calles y a las plazas, haría más fácil este camino. Pero parece evidente que sus dirigentes están eligiendo el sentido contrario, el de la paz social y la gestión del sistema.

Como la experiencia ha demostrado, será el impulso desde abajo el que haga posible una nueva oleada de movilizaciones para acabar con los recortes sociales y avanzar en la transformación de la sociedad. Y en ese proceso, construir una izquierda combativa, revolucionaria y anticapitalista con fuertes raíces entre el movimiento obrero y la juventud es la clave para conseguir la victoria.



¡Es la hora de la lucha y la organización!

Afílate a IZQUIERDA REVOLUCIONARIA

f i t www.izquierdarevolucionaria.net



En la calle y en las urnas, ¡tenemos fuerza para echar al PNV!



El adelanto electoral en la Comunidad Autónoma Vasca (CAV) al 5 de abril, hecho público apenas dos semanas después de la huelga general del 30 de enero, no es una muestra de fortaleza del Gobierno Vasco sino de la creciente debilidad, nerviosismo y temor de la burguesía vasca frente al avance de la movilización y del malestar social, las protestas contra su criminal gestión en el desastre del vertedero de Zaldibar es el último ejemplo. Con esta táctica, Urkullu pretende evitar un mayor desgaste y frenar con las urnas la “primavera roja” que anunció la mayoría sindical vasca.

La huelga general del 30E unificó los múltiples conflictos laborales que ya habían estallado en 2019 por toda la geografía vasca, con cerca de 400.000 jornadas perdidas por huelgas, la mayor actividad huelguística en veinte años, y multiplicando por cuatro el número de jornadas de lucha de 2018. Unido a las movilizaciones de los pensionistas, la lucha feminista, de la juventud frente al cambio climático y de solidaridad con el pueblo catalán y los jóvenes de Altsasu, o por los derechos democráticos de Euskal Herria y de los presos vascos... han mostrado que la imagen del “oasis vasco” que tanto promociona el PNV no es más que una gran mentira. Sus políticas han provocado el aumento de la pobreza, de la precariedad, de las privatizaciones, la represión, de la corrupción más sangrante y de la destrucción del medio ambiente.

Y ante esto, la conclusión es clara: el partido de la patronal vasca se encuentra en apuros, y es posible echarles de Ajuria Enea.

Zaldibar destaca la basura del PNV

El desastre del vertedero de Zaldibar ha sido el ejemplo gráfico de lo que significan las políticas del PNV, de sus intereses, de sus mentiras y de cómo su *modus operandi* se resume en garanti-

zar los beneficios económicos de la patronal aunque esto suponga jugar o condenar la vida y la salud de miles de personas y de nuestro medio ambiente. El desprendimiento del vertedero, con un saldo de dos trabajadores muertos, cuyos cuerpos aún no han aparecido —y ya van 15 en lo que va de año—, es fruto de la precariedad laboral y del insalvable ansia de beneficios de la patronal.

Sin sellado ni drenajes adecuados, con materias letales como el amianto utilizados sin ningún tipo de control, “allí todo se metía para adentro” relataba un trabajador a la prensa. El beneficio neto que esta empresa declaró en 2017 fue de 1,7 millones de euros a disposición de dos accionistas con una plantilla de tan solo seis trabajadores. La falta de un control público adecuado de los vertederos privados es consciente y planificada en la CAV. De hecho, el Plan de Promoción Económica de 2000/03, que sigue vigente en la actualidad —y que fue aprobado por el PNV del lehendakari Ibarretxe y con Josu Jon Imaz como consejero de Industria, convertido en 2014 en consejero delegado de Repsol—, ya argumen-

taba a favor de desregular el seguimiento de los vertederos ya que “el desarrollo empresarial necesitaba la mínima intervención” de las instituciones públicas.

Con este derrumbe del vertedero ha salido también a la luz el caos planificado de los inspectores de trabajo, que han denunciado la falta absoluta de medios para prevenir los accidentes laborales en Euskadi. Reconocen carecer de cualquier intervención preventiva. Acuden solo cuando hay un trabajador muerto y “pretenden relegarnos a ser una especie de funcionarios en reserva para cuando a alguien le aprietan las tuercas desde fuera o para cuando salta algo en los medios de comunicación y entre tanto que se apañen como puedan y si no pueden mejor”.

Frente a la demagogia del PNV: una oposición frontal desde la izquierda, en las calles y en el parlamento

Ahora tenemos la oportunidad de echarles definitivamente del Gobierno Vasco a través de una oposición frontal desde la izquierda que se base en la lucha en las calles y en dar continuidad a la huelga del 30E.

Para ello, es necesario dejar claro que el PNV no es nuestro aliado en ninguna cuestión, tampoco en la lucha por la liberación nacional, tal y como está demostrando en el debate del nuevo estatuto. No le interesa el derecho democrático a la autodeterminación, sino presionar a Madrid para ampliar sus negocios: más trasferencias para más privatización, precariedad y corrupción. Son muy conscientes de que este es el punto para poder anular a la oposición, y tratarán de utilizarlo para presionar a la dirección de la izquierda abertzale. Mientras más acorralados estén por la lucha social, más utilizarán su demagogia hablando del derecho a decidir, de la cultura vasca o buscar “acuerdos de país” y “mesas de diálogo social” tendiendo la mano a EH Bildu y a la mayoría sindical.

Es una estrategia fundamental que ha usado el PNV una y otra vez, y que desgraciadamente han aceptado los dirigentes de UGT y CCOO y en muchas ocasiones también los dirigentes políticos de la izquierda. La aprobación de los presupuestos de recortes gracias al acuerdo con Elkarrekin Podemos es una buena muestra de ello. Pero la propuesta de Eusko Alkartasuna y EH Bildu de abrir una mesa de diálogo para tratar el desastre de Zaldibar como una “cuestión de país” se desliza en la misma dirección.

La izquierda abertzale se ha volcado en impulsar la huelga general adoptando una posición a la izquierda, confrontando con la patronal y poniendo sobre la mesa las reivindicaciones sociales del movimiento. ¡Ese es el camino! Es necesario que la izquierda abertzale y EH Bildu acentúen su total confrontación con el partido de la patronal vasca —en el parlamento y en la calle— desenmascarando su demagogia, dejando claro que son el objetivo a batir y ligando la lucha por la liberación nacional con la batalla por los derechos sociales que el PNV ataca permanentemente. Con este programa y esta estrategia cosecharían un enorme apoyo de la clase trabajadora y la juventud para echarles de una vez del Gobierno Vasco en las próximas elecciones.

Pero votar no basta. Es necesario levantar una alternativa en Euskal Herria para defender un programa revolucionario e independiente de la clase trabajadora y la juventud, que plantee abiertamente la lucha por el socialismo, la expropiación de los grandes capitalistas y el control democrático en las palancas fundamentales de la economía. Solo así podremos acabar con todas las políticas capitalistas, y todo tipo de opresión que sufrimos millones en todo el mundo.



¡Abajo el Gobierno Feijóo!

Hace falta una izquierda combativa



Javi Losada
Esquerda Revolucionaria Galiza

Desde que en 2019 el PP se llevó un duro batacazo electoral en Galicia, tanto en las generales del 28-A, donde por primera vez un partido de izquierdas fue la fuerza más votada, como en las municipales, cuando no consiguió gobernar en ninguna de las siete capitales gallegas, se habla de la posibilidad real de que Feijóo pierda su mayoría absoluta. Un nuevo y enorme golpe para un PP que no deja de retroceder, y que tiene en Galicia su feudo más sólido y emblemático.

Las encuestas marcan dos tendencias: el ligero descenso del PP (de 41 a 38 escaños) que compromete su mayoría absoluta (en 38), y una gran caída de Galicia en Común (GeC), nueva marca de la coalición formada por Podemos, Mareas, Anova e IU, que pasaría de primera fuerza de la izquierda en las autonómicas de 2016 con 14 escaños a quedar-se en 8, o incluso menos.

Recortes y grandes dosis de corrupción

La caída del PP tiene que ver, por supuesto, con la crisis general de la formación en todo el Estado, pero también con el deterioro y desgaste de la falsa imagen que ha tratado de labrarse Feijóo de político íntegro, eficaz y más moderado que el PP estatal; el último ejemplo, su negativa a aceptar una coalición con Cs o el rechazo a pactar con Vox, quienes no superarían el 5% necesario para entrar en el parlamento.

A su conocida relación con los grandes capos del narcotráfico gallego, se han sumado en estos últimos años diversos casos de enclufismo de familiares y amigos en el sistema de salud pública, el Sergas, siguiendo la mejor tradición de Fraga o Baltar. Y a esto hay que añadir ahora el escándalo tras la detención

por corrupción de Emilio Lozoya, exdirector general de la multinacional del petróleo mexicana Pemex con la que Feijóo firmó una alianza en 2012 que terminó siendo ruinosa.

Todo esto, además de ahondar en la naturaleza corrupta de Feijóo, pone de manifiesto que su supuesta eficacia en el terreno económico tampoco se corresponde con la realidad. Y es que en once años de Gobierno el paro no ha mejorado. La deuda pública se ha disparado un 235% (pasando de 4.859 a 11.426 millones de euros, entre el segundo trimestre de 2009 y el tercer trimestre de 2019), el peso de los salarios en la riqueza (PIB) ha disminuido del 48% en 2009 al 42,4% del tercer trimestre de 2019, y la poca industria que había se desmorona, al anuncio o amenaza de cierre de la central térmica de As Pontes, de Alcoa o de Ferroatlántica hay que sumar la sequía de carga de trabajo en los astilleros públicos y privados.

Ola de movilizaciones en defensa de la sanidad pública

En su faceta de “gestor” el apoyo al sector privado en detrimento del público ha sido clamoroso. Como denuncia la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, su gestión de la sanidad pública se ha orientado a “abrir espacios a las multinacionales tecnológi-

cas y farmacéuticas, fondos de inversión y fondos buitres, que han visto en los presupuestos sanitarios y en la política neoliberal de Feijóo una gran oportunidad para hacer negocio”. Empezó por convertir la Atención Primaria en un apéndice de los hospitales lo cual, unido a los recortes, provocó un deterioro acelerado de su capacidad y calidad, que a su vez supuso un colapso de los hospitales. Y continuó por reducir las áreas sanitarias de 11 a 7, lo que, unido al desmantelamiento progresivo de los hospitales comarcales, está agudizando su saturación y dejando a las zonas rurales completamente desatendidas.

Como reacción a dichos ataques se ha producido la mayor ola de movilizaciones contra el PP en estos once años. El ejemplo más llamativo han sido las enormes manifestaciones contra el cierre del paritorio de Verín (Ourense) que duraron más de 50 días, con más de 20.000 manifestantes el 30 de noviembre, y que terminó con una victoria rotunda. La última movilización masiva, con más de 10.000 asistentes bajo la lluvia, en defensa de la sanidad pública se produjo el 9 de febrero en Compostela.

Su gestión de la administración de justicia también provocó en 2018 la lucha de más de 2.700 trabajadores durante más de siete meses, intensificada con una huelga indefinida los últimos 114 días, provocando el aplazamiento de 20.000

juicios y la pérdida de unos 400 euros al mes de promedio de los trabajadores en huelga. Finalmente, se consiguió un aumento salarial de entre 122 y 140 euros mensuales por trabajador.

También los recortes en el mantenimiento de los montes y de los servicios de extinción de incendios, unido a los intereses de las madereras, han provocado una oleada recurrente de incendios que amenazan zonas clave de bosque gallego.

Galicia en Común pagará el precio de su acomodo al sistema. ¡Necesitamos una izquierda combativa, en la calle y en las instituciones!

A diferencia del ambiente de entusiasmo que se respiraba en las últimas autonómicas, cuando En Marea irrumpió con enorme fuerza acompañada de un discurso de lucha y de ruptura contra el régimen del 78 y sus instituciones, estas elecciones están también marcadas por el giro a la derecha operado en la nueva izquierda que vino a “asaltar los cielos”. Durante estos años En Marea (ahora Galicia en Común) se ha mostrado como una herramienta incapaz de cambiar la realidad de la juventud y los trabajadores. Desaparecidos de las luchas y de la movilización en la calle, metidos en estériles batallas parlamentarias, negándose a aplicar medidas básicas como la remunicipalización de servicios en los ayuntamientos donde gobernaban (Compostela, A Coruña y Ferrol), y con el bochornoso espectáculo dado con su ruptura en dos en el parlamento gallego, el resultado es que a día de hoy, entre los sectores más golpeados por la crisis, GeC es vista como una fuerza más del sistema.

Como resultado de esta desilusión, una parte de quienes votaron a En Marea pueden optar en esta ocasión por la abstención o volverán a votar al BNG y PSOE, esperando que este voto sirva, al menos, para impedir la cuarta mayoría absoluta del PP. El BNG aglutinará a los sectores más combativos, las encuestas los sitúan como la segunda fuerza de la izquierda. A diferencia de GeC, si mantienen una presencia real en las luchas, especialmente a través de la CIG. Por su parte, el PSOE, aprovechando la estela que deja el Gobierno de Pedro Sánchez, será el gran beneficiado del voto útil para frenar al PP, recuperando la primera posición como fuerza de la izquierda.

La posibilidad de que Feijóo pierda la mayoría absoluta tiene su origen en las políticas capitalistas aplicadas, y sobre todo en la respuesta que la clase trabajadora y la juventud viene protagonizando durante estos años, ellos han sido la verdadera oposición, marcando el camino de cómo se puede tumbar a este Gobierno.

La lección está clara: necesitamos una izquierda a la altura de la clase obrera, que sea capaz de dotarse de un programa combativo y revolucionario, y que se apoye en la lucha, las movilizaciones y las huelgas, para doblegar al PP y sus reaccionarias políticas de recortes.



Por una movilización de los trabajadores del campo sin patronos y con un programa de clase



Raúl Rivas
Izquierda Revolucionaria
Madrid

Desde que el pasado 30 de enero el sector agrario se movilizara en la localidad extremeña de Don Benito las protestas han continuado en gran parte del Estado español, impulsadas por diferentes organizaciones patronales como ASAJA y por otras con un origen más cercano al movimiento sindical y a la izquierda, como UPA y COAG. En estas acciones han sido los grandes y medianos propietarios los que han acaparado el protagonismo.

De hecho, Vox y el PP, apoyándose en los empresarios del campo, están interviniendo con decisión para orientar las protestas contra el Gobierno PSOE-Unidas Podemos; tal es así que APAG Extremadura ASAJA ha anunciado que se movilizará frente a la casa de Pablo Iglesias e Irene Montero. A la vez, todos estos reaccionarios desparraman toda su demagogia como si los intereses de los pequeños propietarios, los cooperativistas y los jornaleros (muchos de ellos inmigrantes sometidos a jornadas interminables a cambio de salarios de miseria) fueran los mismos que los de los grandes y medianos propietarios y los terratenientes de toda la vida, muchos de los cuales forman parte del aparato del PP o de Vox.

La patronal del campo ha encontrado un aliado en el presidente de Extremadura y dirigente del PSOE, Guillermo Fernández Vara. Este planteó que uno de los problemas del sector agrario residía precisamente en las recientes subidas del salario mínimo interprofesional (SMI). Esta es la misma posición de ASAJA, la pa-

tronal que lleva más de un año bloqueando la aplicación del SMI, que condena a 65.000 trabajadoras y trabajadores extremeños a sobrevivir con salarios inferiores a 900 euros mensuales y que exigió en la negociación del convenio del campo suprimir los quince minutos del bocadillo e incrementar la jornada laboral anual hasta las 1.800 horas para “compensar” la subida del SMI.

Por su parte Unidas Podemos (UP) ha propuesto toda una serie de medidas como la de “fomentar el comercio local y avanzar hacia un etiquetado claro que informe sobre el origen de los productos y sobre el precio que se ha pagado al productor, para saber si realmente ha sido un precio justo”.

El campo: otra víctima de la dictadura de los monopolios

Lo que de momento aprobó el Consejo de Ministros el pasado 25 de febrero fue un paquete de medidas que no ha satisfecho a nadie. Las más importantes son: establecer contratos escritos en los que quede reflejada la cuantía mínima del coste de producción, ningún intermediario podrá vender por debajo de ese coste, solo lo podrá hacer el distribuidor que vende directamente al público, prohibir las promociones comerciales que devalúan la calidad de los productos alimentarios y ganaderos, rebajar el número de peonadas necesarias para percibir el subsidio agrario de 35 a 20 días e incentivar la transformación de contratos agrarios eventuales en indefinidos.

Ninguna de estas propuestas van a la raíz del problema, y desde luego no ayudan a desenmascarar a la patronal del campo ante los pequeños campesinos ni sirven para combatir efectivamente las

posturas más reaccionarias que los grandes empresarios del campo intentan inocular en el movimiento.

Los grandes monopolios que controlan el sector agroalimentario, no solo la distribución y comercialización, también la compra de la producción en origen, son los responsables de esta situación y contra este control es hacia donde deben ir dirigidas las medidas decisivas para que algo cambie realmente.

El volumen de negocio del sector es de 107.000 millones de euros anuales (más del 10% del PIB) y la cadena está controlada de principio a fin por grandes empresas: Mercadona, la más importante, seguida de Dia, Carrefour, Eroski, Alcampo y Lidl.

Esta concentración monopolística del sector que no solo implica precios extremadamente bajos, también unas condiciones salariales y laborales miserables para los jornaleros.

Este control es lo que explica que en 2019 el precio final de los productos del campo se haya incrementado una media del 450% frente al precio de origen. Este margen especulativo es un beneficio íntegro para la gran industria agroalimentaria.

Por otro lado, mientras un puñado de grandes familias terratenientes reciben decenas de millones de euros en subvenciones provenientes de la Política Agraria Común de la Unión Europea —para obtener la mayoría de ellas no es necesario producir nada, ya que estas dependen de la superficie en propiedad y no del volumen de producción—, el pequeño propietario se encuentra asfixiado por las grandes empresas distribuidoras (que imponen los precios) y los bancos, a la vez que los jornaleros son explotados trabajando en muchos casos en condiciones de semiesclavitud.

¡Por un campo con condiciones salariales y laborales dignas!

El ejemplo de Extremadura es muy significativo. Esta comunidad es el territorio con una distribución de la tierra más desigual de toda Europa: 42.000 hectáreas de terreno están en manos de cin-

co grandes propietarios mientras que el 92% de la población mayor de edad no tiene ni un centímetro cuadrado de tierra.

También ocupa uno de los primeros puestos en desigualdad social: casi 90.000 extremeños y extremeñas tienen que recurrir a bancos de alimentos, el 43% de la población se encuentra en riesgo de pobreza y/o exclusión social y el 38,8% tiene una renta inferior al umbral de la pobreza.

Dada esta terrible situación, no es casualidad que sectores de la patronal agraria que se sienten agraviados por las grandes multinacionales, pero también con el objetivo de evitar que el creciente descontento que se desarrolla entre los pequeños propietarios y trabajadores del campo ponga en peligro sus privilegios, intenten desviar la atención de su responsabilidad y traten de arrastrar tras de sí a sectores de pequeños propietarios muy golpeados.

Ninguna mejora podrá venir de los mismos que nos oprimen y nos explotan día a día, que han mantenido sus posiciones de privilegio a costa del sufrimiento de decenas de miles de trabajadores y trabajadoras.

Los sindicatos de trabajadores y trabajadoras del campo deben convocar movilizaciones que realmente respondan a las aspiraciones de los jornaleros y pequeños propietarios, rompiendo inmediatamente con estos elementos patronales que solo buscan seguir enriqueciéndose a nuestra costa. Nunca medias tintas han solucionado ninguna cuestión importante, y esta lo es. Hay que luchar por la nacionalización de los grandes monopolios del sector agroalimentario para poder establecer precios justos para los productos y asequibles para toda la población, hay que expropiar la propiedad latifundista y llevar a cabo una reforma agraria integral para dignificar realmente las condiciones de los jornaleros, acabar con el paro, el PER y el caciquismo.

Este es el programa que debería aplicar este Gobierno de coalición y no medidas cosméticas que no solucionan nada. Solo la movilización independiente de los trabajadores agrarios con un programa de clase, sin patronos ni terratenientes, podrá transformar la situación del campo.



Gijón: Por la remunicipalización del Servicio de Ayuda a Domicilio

Entrevistamos a Carmen Diego y Alejandra Tejón



EL MILITANTE.- El Ayuntamiento de Gijón ha pasado de las manos de la derecha, con Foro por Asturias, a las del PSOE. ¿Qué ha cambiado en vuestra situación laboral y respecto a la remunicipalización del servicio?

Carmen Diego.- Todo sigue igual. La empresa privada que explota el servicio, Aralia, sigue sin cumplir con los pliegos de condiciones y además está tratando de una forma totalmente despreciativa a nuestras compañeras eventuales, a las que no les está pagando las liquidaciones del contrato. En el último pleno, la concejala dijo que la empresa estaba pagan-

do y que por eso el contrato con Aralia seguía en vigor. No es verdad. Después, tuvo que matizar que sabían que había algunas trabajadoras que no estaban cobrando. Para nosotras eso es motivo más que suficiente para rescindir ese contrato y remunicipalizar el servicio.

EM.- Tenéis claro que la remunicipalización del servicio es la solución. ¿En qué ejemplos os apoyáis?

Alejandra Tejón.- Uno de los más significativos es el de Jerez de la Frontera. Allí, el Ayuntamiento, que estaba intervenido por Hacienda, aprobó la remunicipalización y a día de hoy hay 400 tra-

bajadoras, cien más de las que había, no hay lista de espera, tienen muchos más usuarios y usuarias y muchas más prestaciones, y las trabajadoras han firmado un convenio que ya lo quisiéramos aquí. Y contra todos los miedos que nos quieren meter nadie ha tenido que hacer ningún concurso oposición ni ha habido despidos.

EM.- ¿Qué balance hacéis de estos veinte años de lucha?

CD y AT.- Es una lucha titánica, porque además de la pelea con las empresas por las que hemos ido pasando está la batalla con el Ayuntamiento. La alcaldesa del PSOE, Ana González, el feminismo del que hace gala y el de su equipo de Gobierno, choca con el hecho de tener a una plantilla de 270 mujeres precarizadas con dinero público. Después, está la pelea que tenemos que dar en el comité de empresa con CCOO y UGT, a quienes hemos tenido que presionar para llevar a cabo las acciones de lucha. En el otro lado de la balanza se encuentra el apoyo que estamos recibiendo, y eso nos anima a seguir luchando por la única solución posible, la remunicipalización.



Puedes leer la entrevista completa en izquierdarevolucionaria.net



19F: La huelga paraliza la petroquímica de Tarragona



Manuel Vidal
IAC-FTC · Presidente del comité de empresa de COMSA Service (Tarragona)

El 19 de febrero la petroquímica de Tarragona quedó totalmente paralizada en la primera huelga general en la historia de este sector en la ciudad catalana. Los 11.000 trabajadores —un 60% de las químicas y el 40% de empresas contratistas— convocados por CCOO, UGT, CGT y USOC secundaron unánimemente el paro. La jornada culminó con una manifestación de unas 3.000 personas que recorrió las calles de la ciudad.

En los últimos ocho meses la petroquímica ha sufrido cuatro accidentes con cuatro personas fallecidas. Las causas están claras: la precariedad laboral en constante aumento, la continua reducción de la inversión en seguridad y la subcontratación de servicios; todo ello para que las empresas incrementen sus beneficios a costa de nuestra salud y sin que importe que esto suponga poner en peligro la vida de muchas personas.

Este es el resultado de la voracidad empresarial y de años de sindicalismo de colaboración con la patronal y paz social.

Esta importante huelga tiene que ser el principio de la lucha para exigir medidas urgentes y planes de inversión en la petroquímica, y demás empresas de la comarca, y su nacionalización bajo el control de los trabajadores. ¡La lucha es el único camino!



Puedes leer el artículo completo en izquierdarevolucionaria.net

Manifestación en Ferrol el 15 de marzo

¡Navantia 100% pública!



Vicente Ferrer
Esquerda Revolucionaria /
Comité de empresa
Navantia-Ferrol · CGT

El 15 de marzo habrá una gran manifestación en la comarca de Ferrol en demanda de carga de trabajo para Navantia.

Una pequeña plantilla para gestionar y mantener la empresa operativa y otra gran plantilla “volante” que cuando hay carga de trabajo acomete las tareas productivas y cuando no, se va al paro. Este es en esencia el modelo soñado por la dirección de Navantia y los empresarios del sector. Un modelo que se ha profundizado en el año transcurrido desde la firma del último plan de empresa. La plantilla

de la principal ha quedado relegada a tareas no productivas, incluso se han dejado morir muchos gremios o directamente se han desmantelado. Y el desmantelamiento no solo afecta a la mano de obra. Las tareas de ingeniería, con un alto valor añadido, van por el mismo camino.

A día de hoy es difícil decir que Navantia es una empresa pública. Es como un escudo tras el cual se amparan una multitud de compañías privadas que se lucran jugosamente con la precariedad y que utilizan al Estado para que se haga cargo de las pérdidas que provoca su modelo. “Pérdidas públicas, beneficios privados”, una vieja receta neoliberal muy de moda.

Los trabajadores, tanto de la industria auxiliar como de la principal, solo tene-

mos una alternativa: defender una empresa 100% pública. Hay que eliminar a los empresarios porque son meros explotadores de mano de obra, unos parásitos sociales, que no juegan ningún papel en la producción.

Desde CGT defendemos que, a la reivindicación de carga de trabajo, hay que sumarle la denuncia del proceso de privatización indirecta a través de la subcontratación y exigir que Navantia contrate directamente mediante convocatoria pública y con todas las garantías los profesionales que necesita.



Puedes leer el artículo completo en izquierdarevolucionaria.net

I Encuentro en Catalunya de



El 15 de febrero celebramos el I Encuentro de Sindicalistas de Izquierda en Catalunya. Participamos delegados sindicales, trabajadores y trabajadoras de Ingeniería y Montajes, Activais, Comsa Service, Transportes Batet, Fundació Pere Mata y otras empresas de Tarragona, Barcelona y Girona. Entre los temas tratados destacaron las luchas en Francia o la huelga en la petroquímica de Tarragona, y aprobamos impulsar dos campañas de solidaridad:

- Contra las represalias que sufre Meritxell Fernández, abogada de CGT, por parte del Secretariado Permanente de Tarragona.

- Contra la multa de 400 euros que el Ajuntament de Tarragona ha impuesto al educador Nicolás Vettas, denunciado por defender a menores inmigrantes de una actuación racista de la Guardia Urbana.

La conclusión del Encuentro fue que, frente a los problemas que sufre la clase obrera —ataques de la patronal, represión, machismo, racismo, ofensiva de la derecha y los jueces franquistas contra los derechos democráticos—, la lucha es el único camino y debemos defender un programa que sirva para luchar unificadamente por transformar la sociedad y acabar con cualquier forma de opresión: nacional, de género, raza o clase.



Puedes leer el artículo completo en sindicalistasdeizquierda.net





Privatización y recortes arrojan a menores tutelados a las redes de trata y prostitución



Laura Luengo
Ezker Iraultzailea
Bilbo

La pasada Nochebuena, una niña de 13 años tutelada por el Consejo Insular de Mallorca, que vivía en un centro concertado para menores, fue violada por la conocida como *manada de Palma*. Esta violación ha vuelto a destapar la cruda realidad de la explotación sexual.

El Institut Mallorquí d'Afers Socials ha admitido hasta 16 casos de abuso sexual de menores (15 niñas y un niño) bajo su tutela en diferentes centros de acogida. Los educadores de estos centros de Baleares han denunciado que la explotación sexual llega a ser "prácticamente total entre las jóvenes de algunos centros". ¿Cómo es posible que centros públicos que deberían cuidar y proteger a niños y niñas en situaciones de vulnerabilidad extrema se conviertan, en la práctica, en la puerta de entrada de cientos de jóvenes a la prostitución?

Un informe de Unicef de 2017, basado en entrevistas a más de 300 responsables, educadores y menores, alertaba de que había casos de explotación sexual en centros de siete de las nueve comunidades autónomas que estudió, y advertía que "podría haber indicios de que son captados por redes de trata de seres humanos, que además les utilizan para conseguir contactar con otros menores del centro".

Beneficios a costa de los más vulnerables

Las y los jóvenes acogidos por la administración se enfrentan generalmente a una realidad socioeconómica muy difícil: familias desahuciadas, pobreza y exclusión social. Y en algunas ocasiones, haber enfrentado una desatención grave o violencia sexual en sus hogares... por no hablar de la violencia física, alcoholismo y demás lacras sociales presentes en nuestros barrios.

Además, también los menores extranjeros no acompañados son acogidos

en centros de primera acogida, donde no cuentan con medios suficientes. En 2018 personal de la Junta de Andalucía denunció el hacinamiento de los menores inmigrantes. Describían una situación caótica donde se triplicaban los ratios de niños a acoger, camas en pasillos y comedores, sin poder cubrir dignamente necesidades básicas como la comida o el aseo, ausencia de intérpretes para atender debidamente a quienes no hablan castellano. Por supuesto, la atención psicológica que necesitan estos jóvenes brilla por su ausencia.

A esta falta de recursos, agudizada por los recortes en los servicios públicos, se suma el aumento de la pobreza, que implica un incremento de menores en estos centros. De 2014 a la actualidad se ha pasado de 13.563 menores tutelados a 21.283. Entre 2016 y 2018 el número de extranjeros se ha disparado de 2.974 a 10.359, de estos, 9.506 son menores no acompañados.

Según los datos del Observatorio de la Infancia, en 2018 había a nivel estatal 1.104 centros de menores, solo 216 eran públicos y el resto concertados. La situación de los profesionales destaca por la precariedad y la temporalidad que sufren. Todo esto conecta inevitablemente con los intereses de las empresas, fundaciones privadas, etc., que reciben los conciertos de estos centros, cuyo objetivo no es dar a estos jóvenes la oportunidad de salir de entornos desfavorecidos y peligrosos, sino obtener el máximo beneficio económico. Es en esta situación de máxima precariedad, privatización y abandono por parte de la administración en la que se dan las condiciones para que las redes de trata puedan captar a sus víctimas.

Un negocio heredado del franquismo

No solo el funcionamiento de los centros está en cuestión. Las retiradas abusivas de tutelados son un verdadero escándalo. La

mayoría de ellas derivan exclusivamente de situaciones de precariedad económica. Se acumulan las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenando al Estado español por la arbitrariedad en la retirada de tutelados y la indefensión de las familias. Y es que, en una anomalía más, no es un juez quien ordena la retirada de la tutela sino un funcionario autonómico a través de una simple orden administrativa.

De esta manera se engorda el fabuloso negocio de los centros de menores, recibiendo las empresas entre 3.000 y 7.000 euros al mes por "plaza ocupada". De ahí la necesidad de acabar ya con la privatización directa o indirecta de este sector impidiendo que se continúe haciendo negocios.

Esto es así porque el actual sistema de protección de menores es heredero directo del sistema tutelar franquista, caracterizado por los abusos y la violencia más feroz. Muchas de las órdenes religiosas encargadas de los hospicios y del Patronato de la Mujer siguen gestionando actualmente centros de menores y reformatorios.

Contra la explotación sexual de menores y la prostitución. ¡Por una red pública digna de servicios de acogida!

Al destaparse este escándalo, Vox, Cs y el PP recurrirían a su habitual demagogia, poniendo el grito en el cielo tanto en el Parlament Balear—gobernado por PSOE, Unidas Podemos y Más per Mallorca— como en el Congreso de los Diputados.

Los mayores defensores y ejecutores de la privatización de todo lo público lamentan hoy este drama como si nada tuviera que

ver con el abandono al que sus políticas han abocado a estos jóvenes extremadamente vulnerables. Su cinismo no tiene límite, basta ver las declaraciones de sus máximos dirigentes respecto de los jóvenes que se encuentran en estos centros, azuzando el racismo y poniendo una diana sobre ellos. Rocío Monasterio, el pasado noviembre, afirmaba barbaridades como que estos menores impiden que "las mujeres puedan andar solas por las calles"; en diciembre, el centro de primera acogida de menores extranjeros no acompañados de Hortaleza (Madrid), sufría un ataque racista con la aparición de una granada en el patio.

Estos defensores de los vientres de alquiler, del racismo y de las políticas que castigan a los sectores más humildes no tienen la más mínima preocupación por los menores tutelados.

Sin embargo, hay que decir que la respuesta del Gobierno balear ha sido lamentable: con los votos de PSOE, Unidas Podemos y Más per Mallorca se impedía la puesta en marcha de una Comisión de Investigación, dejando todo en manos de la Fiscalía y eludiendo su responsabilidad al frente del Gobierno. La única medida ha sido el anuncio del Institut Mallorquí d'Afers Socials de un curso de formación para prevenir la explotación sexual de menores, que consiste en disuadir a las menores para que no caigan en "esas prácticas", una vez más responsabilizando a las víctimas.

Esta situación jamás se resolverá con consejos "disuasorios", ni con palabras indignadas en el parlamento como las que Pablo Iglesias dedicaba a la bancada de la reacción. ¡Necesitamos medidas prácticas que garanticen recursos humanos y materiales que puedan atender en condiciones de calidad las necesidades de estos jóvenes! Eso significa, en primer lugar, acabar con el negocio de los conciertos y las privatizaciones de estos centros que deben ser 100% públicos. Significa una investigación seria y que se depuren responsabilidades, que se castigue de forma ejemplar a los responsables; defender la abolición de la prostitución y todas las formas de trata y explotación; confrontar con los grandes poderes económicos que, legal o ilegalmente, se hacen de oro a costa de la necesidad de los más indefensos; revertir todos los recortes que alimentan la pobreza en la que crecen estos menores, y que les expone a ser víctimas de las redes de la prostitución, trata, de la droga, de las casas de apuestas y de otros negocios millonarios.



La juventud empuja la lucha feminista anticapitalista

► VIENE DE LA CONTRAPORTADA

No podemos, no debemos, otorgar un cheque en blanco a este Gobierno. Tenemos que garantizar que nuestras demandas se cumplen y hay un cambio real, y solo lo lograremos aumentando la fuerza de nuestro movimiento. La huelga general feminista sigue siendo una pieza clave de esta estrategia.

**Gobierno PSOE-Unidas Podemos.
¡Basta de palabras!
¡Queremos hechos!**

Este clamor de la juventud también iba dirigido al Gobierno PSOE-UP. Y es que, no por casualidad la misma semana del 8M la ministra de Igualdad, Irene Montero, hacía gala del nuevo Anteproyecto de Ley de Libertad Sexual aprobado en el Consejo de Ministros.

Desde las calles le hemos dicho: ¡por supuesto que queremos que las leyes reconozcan nuestros derechos! Pero no es suficiente. Esta ley no garantizará que se cumpla lo escrito, ya que la judicatura está plagada de franquistas y machistas que nunca fueron depurados tras la caída del dictador.

En segundo lugar, se deja fuera un aspecto central: la abolición de la prostitución, la forma más descarnada de explotación y violencia contra las mujeres. ¿Cuándo será el momento de perseguir y expropiar a quienes se hacen de oro a costa de la explotación de las más oprimidas?

En tercer lugar, ¿dónde están los recursos materiales necesarios para sacar efectivamente a las mujeres de la situación de violencia que viven? Los siguen teniendo los grandes banqueros, la patronal, la jerarquía de la Iglesia católica, y hay que confrontar con ellos, con los y las que nos oprimen cotidianamente y luego se ponen un lacito morado en la solapa.

Las pequeñas reformas o poner por escrito lo que nosotras hemos conquistado luchando —como en el caso de la sentencia de La Manada— no van a solucionar nuestra situación. ¡Basta de medias tintas y de renunciadas!

Para acabar con el machismo en las aulas reclamamos: ¡Prohibición por ley del “Pin Parental”, implantación inme-

diata de una asignatura de educación sexual inclusiva y evaluable, fin de los recortes educativos y de las subvenciones a la concertada! Ni podemos esperar, ni queremos buenas palabras. Hacen falta hechos.

El 8M llena las calles contra la extrema derecha y la reacción

Las mismas consignas que el 6M se creaban a pleno pulmón resonaban también en las manifestaciones del 8M. ¡Abascal es un criminal! ¡Contra la brecha, fuera la derecha! Mientras dirigentes de Vox como Ortega Smith se referían al 8 de marzo como “una fecha para olvidar” y Rocío Monasterio lo calificaba de “aquellarre” la masividad en las calles ha sido la mejor contestación a su discurso fascista y machista, así como a las maniobras de los partidos de la derecha para tratar de descafeinar, un año más, el contenido de clase y anticapitalista de nuestro movimiento.

Algunas mujeres de Cs y el PP han salido públicamente diciendo que son feministas y que irían al 8 de Marzo. De nuevo, intentando introducir la venenosa idea de que “todas las mujeres” estamos del mismo lado de la barricada. Pero nuestro movimiento ya conoce de sus artimañas y, sobre todo, sabe muy bien que ellas no defienden los derechos de las oprimidas, no son nuestras aliadas, sino que se levantan sobre nuestra explotación.

La fuerza de este 8M ha sido la mejor demostración de cómo combatir a la extrema derecha, a la derecha y a la reacción. Frente a los discursos parlamentarios o los “frentes constitucionalistas” que se han mostrado completamente inútiles, la lucha de masas es la respuesta. El sello antifascista está grabado en el ADN del poderoso movimiento que hemos levantado. Y es que —a diferencia de lo que nos tratan de hacer creer los medios al servicio del sistema— esta no es una lucha de mujeres contra hombres, sino de oprimidas y oprimidos contra opresores y opresoras. Así, el 8M ha vuelto a ser una jornada histórica y a dejar claro que somos las trabajadoras, las jóvenes de las familias



València



Asturias



Bilbo

humildes, las explotadas, luchando codo a codo con nuestros compañeros, las que hemos llenado las calles.

Por un feminismo revolucionario y anticapitalista

Las jornadas del 6 y el 8 de marzo ponen de manifiesto la determinación del movimiento, con la juventud a la cabeza, de no ceder un palmo en la defensa de nuestros derechos democráticos, por la igualdad real y contra la opresión a la

que nos condena el sistema capitalista. Ningún derecho importante se ha logrado solo con una votación parlamentaria, sino que es el fruto de la lucha masiva en las calles. Por eso tenemos que defender un feminismo revolucionario y anticapitalista, que luche por la transformación socialista de la sociedad. ¡Solo atacando la raíz del problema podremos liberarnos de nuestras cadenas y conquistar una sociedad libre de machismo y de cualquier otro tipo de opresión!



La juventud empuja la lucha feminista anticapitalista

¡NO PASARÁN!

Sindicato de Estudiantes y Libres y Combativas

El pasado 6 de marzo más de dos millones de estudiantes secundaban la huelga convocada por el Sindicato de Estudiantes y Libres y Combativas y más de 100.000 tomaban las calles de todo el Estado en más de 40 manifestaciones contra la violencia machista y la ofensiva franquista del Vox, PP y Cs. Al grito de ¡No pasarán! daban el pistoletazo de salida a las movilizaciones del 8M con una fuerza arrolladora.

Un año más, las multitudinarias manifestaciones del 8M, con más de tres millones de personas inundando las plazas de centenares de grandes ciudades, pequeñas localidades y pueblos, han confirmado la voluntad y determinación de este movimiento. La lucha masiva por los derechos de las mujeres oprimidas es una de las expresiones más importantes de la lucha de clases a nivel internacional. Así lo revelan también las inmensas movilizaciones que han tenido lugar en Améri-

ca Latina, desde las manifestaciones en países como Colombia hasta la histórica huelga general feminista el 9 de marzo en Argentina, Chile y México, donde millones han salido a las calles contra este sistema violento y opresor.

6M: Las y los estudiantes sí hacen huelga feminista

La marea morada de la juventud ha vuelto a tomar las calles. El 6M en Barcelona, Tarragona y el resto de las capitales catalanas, más de 60.000 jóvenes abarrotaban las principales arterias. Más de 15.000 en Madrid marchábamos desde la Puerta del Sol hasta el Ministerio de Igualdad en la calle Alcalá; más de 10.000 en el País Valencià (Valencia, Alacant y Castelló); otras 15.000 en las ocho manifestaciones andaluzas; más de 3.000 en las ciudades de Euskal Herria, más de 2.500 en Asturias, miles en Galiza, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Canarias, Balears y, por supuesto, en Murcia. Encabezadas por enormes pancartas del Sindicato de Estudiantes y Libres y Combativas con las consignas de ¡No pasarán! y ¡Fuera el machismo de nuestras aulas!, el ambiente era realmente eléctrico y excepcionalmente combativo.

Miles de carteles y pancartas caseras se fundían con las consignas que coreaban en las protestas y recogían sus principales reivindicaciones. ¡Fuera el machismo de nuestras aulas! ¡Con o sin ropa mi cuerpo no se toca! ¡El pin parental es mierda de Abascal! ¡Contra el pin parental, educación sexual! ¡Patriarcado y capital alianza criminal! ¡El adoctrinamiento viene del convento! ¡Vox y PP, la misma mierda es! También en Catalunya, el País Valencià y Euskal Herria el mismo mensaje resonaba con fuerza: ¡Els carrers seran feministes! Zuek faxistak zarate terroristak!

La gran jornada del 6M confirmaba también lo que desde el Sindicato de Estudiantes, Libres y Combativas e Izquierda Revolucionaria hemos defendido en todas las asambleas del 8M del estado: la necesidad de que este año también hubiera una huelga general feminista

de trabajadoras y trabajadores, involucrando al movimiento sindical y a todos los colectivos y asambleas, como sucedió en 2018 y 2019. Lamentablemente, una parte de las compañeras vinculadas a CCOO y UGT y a los partidos que ahora conforman el Gobierno se han negado en redondo a aceptar esta propuesta.

Los argumentos para este rechazo han sido, en nuestra opinión, erróneos y contraproducentes. No tiene sentido argumentar que una huelga feminista socavaría al nuevo Gobierno. En realidad, mostrar nuestra fuerza mediante una nueva huelga general es la manera más efectiva de enviar un golpe demoledor al bloque reaccionario de PP, Vox y Cs, al mismo tiempo que empujar al Gobierno de PSOE y Unidas Podemos a que cumpla con nosotras.

La violencia machista sigue siendo una realidad, como la justicia patriarcal, la precariedad, la desigualdad laboral y salarial, la opresión de los cuidados, los recortes en dependencia y en la enseñanza pública o los desahucios.

PASA A LA PÁGINA 15 ▶

